

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/AC.2/1994/8
28 de marzo de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
Grupo de Trabajo sobre las Formas
Contemporáneas de la Esclavitud
19º período de sesiones
25 de abril a 4 de mayo de 1994
Tema 4 d) del programa provisional

EXAMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN OTRAS ESFERAS DE LAS
FORMAS CONTEMPORANEAS DE LA ESCLAVITUD, EN PARTICULAR TODAS LAS
FORMAS DE EXPLOTACION Y TRATA QUE AFECTEN A LOS NIÑOS, COMPRENDIDOS
EL FENOMENO DE LOS NIÑOS SOLDADOS, EL TRAFICO ILEGAL CON FINES DE
ADOPCION Y LOS TRASPLANTES DE ORGANOS

Informe del Secretario General preparado de conformidad
con la resolución 1993/5 de la Subcomisión

INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	2
ETIOPIA	2
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA	2
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE	4
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA	5
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL	6

INTRODUCCION

En el párrafo 8 de su resolución 1993/5, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías pidió al Secretario General que, con carácter de urgencia, invitara de nuevo a todos los gobiernos, a los órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a los organismos especializados, en particular la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y a todas las organizaciones no gubernamentales interesadas a que prosiguieran sus investigaciones a fondo de las denuncias sobre extracción de órganos de niños y a que indicaran las medidas tomadas, en su caso, para combatir esa práctica dondequiera que existiera, con miras a presentar un informe al respecto al Grupo de Trabajo en su 19º período de sesiones.

En consecuencia, el 25 de octubre de 1993, el Secretario General envió notas verbales y cartas a los gobiernos, órganos de las Naciones Unidas y organizaciones señalados. El presente documento contiene las respuestas recibidas.

ETIOPIA

[Original: inglés]
[23 de diciembre de 1993]

El Gobierno provisional de Etiopía declaró que hasta la fecha el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales no había recibido información sobre ningún caso de extracción de órganos. Está vigente una legislación nacional para combatir esos casos, de ser necesario.

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

[Original: árabe]
[29 de noviembre de 1993]

El Congreso General del Pueblo promulgó la Ley Nº 4/82 relativa a la admisibilidad de la disección de cadáveres y los trasplantes de órganos de personas fallecidas. El artículo 1 de esa Ley estipula lo siguiente:

"Los cuerpos de personas fallecidas podrán ser objeto de disección únicamente en las siguientes circunstancias:

- i) la disección con fines científicos y educacionales, siempre que se cuente con la autorización testamentaria del difunto o el consentimiento de uno de sus parientes hasta el cuarto grado;
- ii) la disección para determinar las causas de la muerte por orden de la fiscalía general.

- iii) la disección con fines médicos para determinar las causas de la muerte por orden de un médico competente.

En tales casos deberá efectuar la disección un especialista médico en un hospital."

El artículo 2 de la Ley N° 4/82 estipula además que los órganos de personas fallecidas que sean aptos para trasplantes podrán utilizarse siempre que se cuente con la autorización testamentaria del difunto o el consentimiento de sus parientes hasta el cuarto grado. Los órganos sólo podrán ser extraídos por un especialista médico en un hospital. La Ley prescribe una pena de no menos de un año de prisión y una multa de no menos de 100 dinares para toda persona que contravenga las disposiciones jurídicas mencionadas.

La Ley también estipula que si el transgresor es un médico, además de imponérsele la pena de prisión y la multa, se le prohibirá el ejercicio de la profesión médica por un período de no menos de cinco años.

El artículo 6 de la Ley N° 20/91 sobre la promoción de la libertad, promulgada el 1° de septiembre de 1991, prevé que "toda persona tiene derecho a la integridad física. Se prohíbe realizar experimentos científicos en el cuerpo de una persona viva sin su libre consentimiento".

El artículo 10 de la Ley N° 17/86 sobre responsabilidad médica estipula que para toda operación quirúrgica debe tenerse debidamente en cuenta lo siguiente:

- a) la operación debe realizarse en una institución terapéutica o en una clínica médica equipada para ese fin;
- b) deben efectuarse las pruebas y análisis necesarios para cerciorarse de que el paciente está en condiciones de salud que le permiten someterse a la operación;
- c) el estado de salud del paciente debe justificar la operación, salvo en los casos de donación voluntaria de partes u órganos del cuerpo;
- d) para la operación debe obtenerse el consentimiento por escrito del paciente, o de su representante legal si no ha alcanzado la mayoría de edad o si su condición no le permite manifestar sus deseos, a menos que dos médicos, como mínimo, certifiquen que la operación es indispensable y urgente y que ha sido imposible obtener el consentimiento para ella.

Cabe señalar que las dos leyes mencionadas establecen normas jurídicas y reglamentos que no deben infringirse con respecto a las operaciones quirúrgicas, la disección de cadáveres y la utilización de órganos de personas fallecidas, por ejemplo, mediante su trasplante a personas vivas.

La legislación de la Jamahiriya no hace distinciones entre una persona y otra; la prohibición de extraer y trasplantar órganos es aplicable por igual respecto de los niños y los adultos.

El artículo 15 de la Ley N° 17/86 prohíbe la injerencia en el cuerpo de una persona y la extracción de un órgano o una parte de éste sin un consentimiento entregado por escrito después de determinarse que la persona no sufrirá daño alguno si está viva o de conformidad con las disposiciones de la mencionada Ley N° 4/82 si se trata de una persona fallecida. La ley también prohíbe que se utilice el cuerpo de una persona viva para realizar experimentos científicos a menos que se cuente con su consentimiento, que se tenga previsto que la persona obtenga beneficios de ellos y que esos experimentos sean realizados por médicos autorizados para hacerlo de conformidad con los principios científicos universalmente reconocidos.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

[Original: inglés]
[1° de febrero de 1994]

Una y otra vez los gobiernos han opinado que la donación de órganos debe ser un asunto del libre albedrío de cada individuo o de su familia inmediata y que debe constituir una entrega positiva y altruista. Nadie debe ser forzado, presionado o inducido a donar sus órganos para un trasplante. La legislación lo garantiza. La Ley sobre trasplantes de órganos humanos de 1989 prohíbe cualquier tipo de pago por los órganos donados e impone considerables restricciones a los trasplantes entre personas vivas. La Ley sobre tejidos humanos de 1961 permite la utilización de órganos de personas fallecidas en circunstancias determinadas y siempre que se cuente con el consentimiento del donante o de sus familiares.

Los órganos de niños fallecidos pueden utilizarse para un trasplante con sujeción, desde luego, a las disposiciones de las dos leyes mencionadas. El Código de práctica sobre los órganos de cadáveres para trasplantes del Departamento de Salud estipula lo siguiente: "Para tratar con los padres de un niño fallecido se precisa una delicadeza y un tacto particulares; aunque la ley no exige que se obtenga el consentimiento de los padres, éste siempre debe obtenerse en el caso de un niño".

La situación es algo distinta cuando se trata de un órgano de un donante vivo. Conforme a la ética de la profesión médica, es muy improbable que se pueda extraer un órgano de un niño vivo para trasplantarlo a otra persona si ese niño no está en condiciones de dar su consentimiento válido. El Departamento de Salud hace gran hincapié en la necesidad de que los profesionales de salud obtengan el consentimiento de los pacientes para todo tipo de tratamiento. Un niño de menos de 16 años puede dar su consentimiento, pero el profesional de salud de que se trate debe cerciorarse de que el niño comprende cabalmente lo que se propone.

La extracción de un órgano de un niño vivo para trasplantarlo a otra persona es una proposición extremadamente seria, y aun cuando obtenga el consentimiento de los padres, el facultativo de que se trate puede decidir no proceder a la operación. La decisión final sobre la aplicación de cualquier forma de tratamiento médico recae en el médico. Al decidir sobre un trasplante entre personas vivas, el médico tendrá en cuenta los riesgos a que se expone el donante propuesto y, en su caso, el hecho de que el donante propuesto sea un menor.

La Ley sobre trasplantes de órganos humanos de 1989 impone restricciones a los trasplantes entre personas vivas que no tengan lazos genéticos. Todos los trasplantes propuestos entre personas vivas que no tengan lazos de consanguinidad deben someterse al Organismo Regulador de los Trasplantes entre Personas Vivas sin Relaciones de Parentesco (ULTRA), que decidirá si se puede proceder a ellos. Se informa en detalle a todos los donantes vivos acerca de los peligros del paso que se proponen dar. Estas disposiciones se aplican por igual a niños y adultos.

La Ley sobre trasplantes de órganos humanos y los reglamentos elaborados en virtud de esa Ley exigen que se informe sobre todos los órganos donados y trasplantados al organismo de Servicios de Apoyo a los Trasplantes del Reino Unido (UKTSSA). Debe presentarse información completa sobre el donante y el receptor, el médico, el lugar de la operación y el(los) órgano(s) de que se trata, así como el lugar de origen de los órganos. Ello vale tanto para los órganos extraídos en el Reino Unido como para los procedentes del extranjero.

En 1991 y 1992 se recibieron 70 órganos para trasplantes, todos ellos de Europa. De éstos, 26 eran de niños de menos de 18 años de edad en 1991 y 14 en 1992. La mayoría de los países europeos y otros muchos países tienen legislación y mecanismos de control semejantes a los del Reino Unido para impedir el tráfico de órganos y supervisar su entrega y utilización.

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA

[Original: inglés]
[2 de diciembre de 1993]

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su segundo período de sesiones examinó la cuestión de los efectos de la delincuencia organizada sobre la sociedad en relación con el tema 3 de su programa. En el informe presentado por la Secretaría (E/CN.15/1993/3) se señalaba que el mercado negro de órganos para trasplantes era uno de los campos específicos de operación de la delincuencia organizada. "La gran cantidad de personas indigentes y sin hogar, incluso niños, que viven en las zonas urbanas, en especial en los países en desarrollo, constituyen una fuente de abastecimiento de dichos órganos para trasplantes. Seguramente este mercado negro irá cobrando más importancia a medida que los adelantos tecnológicos permitan conservar durante más tiempo los órganos una vez extraídos, de manera que puedan transportarse a larga distancia.".

Aunque la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal es consciente de la gravedad de esta situación, no cuenta por el momento con un mandato para realizar investigaciones, estudios u otras actividades en esta esfera. La existencia de otras prioridades urgentes y la escasa disponibilidad de recursos de hecho han limitado toda iniciativa a este respecto. Además, la cuestión de la esclavitud aún no ha sido examinada por la Comisión y no se halla inscrita en su programa.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL

[Original: inglés]
[5 de enero de 1994]

Desde 1987 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se ocupa del problema de los trasplantes ilegales de órganos. Una serie de informes de prensa atrajeron la atención de la Secretaría General y de la Oficina Nacional Central del Brasil y se decidió realizar un estudio entre los países miembros. Este estudio no reveló ninguna información nueva.

En 1991 la Oficina Nacional Central del Brasil nos informó de que se investigaba, en colaboración con la policía del Uruguay, un caso de trasplante ilegal de órganos en un hospital de Sao Paulo. Sin embargo, las investigaciones no condujeron al procesamiento de ningún sospechoso.

El trasplante ilegal de órganos también se examinó durante el 62º período de sesiones de la Asamblea General, en 1993, a petición de la delegación del Brasil, que consideraba sumamente importante dejar en claro que las acusaciones hechas por el profesor Schwartzenberg ante el Parlamento Europeo carecían de todo fundamento. El profesor Schwartzenberg sostenía que 3.000 niños adoptados en el Brasil de hecho habían sido vendidos a la Camorra napolitana para efectuar trasplantes. La Interpol seguirá vigilando de cerca este asunto.
